

**República de Colombia**  
**Rama Judicial del Poder Público**



**Juzgado Diecinueve Civil Municipal**

Bogotá D.C, once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**Ref. No. 2022-00260.**

**I. OBJETO DE LA DECISIÓN**

Resuelve el Despacho las objeciones formuladas por el acreedor Gladys E. Valderrama Báez a la relación de acreencias efectuada por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición Fundación Liborio Mejía, dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante de Doris del Rosario Molina Mora.

**II. ANTECEDENTES**

**1.** La señora de Doris del Rosario Molina Mora, promovió solicitud de negociación de deudas de persona natural no comerciante, en la cual relacionaron varias acreencias dentro de ellas: **i)** tres de primera clase a favor de Secretaría de Hacienda Municipal de Duitama, María Amparo Vergel Ordoñez, Mónica Paola Higuera Molina, Claudia Isabel Higuera Molina y Angélica María Higuera Molina por un valor total de \$144.469.120; **ii)** 2 créditos de tercera clase a favor de Álvaro Calvo Niño en la suma de \$15.740.098; y **iii)** 6 obligaciones de quinta clase a favor de Gladys Esther Valderrama Báez, Daniel Gutiérrez Orduz, Jorge Enrique Higuera Becerra, Banco Davivienda S.A, Banco Falabella y Fundación de la Mujer en un monto equivalente a \$173.539.218, cuyo conocimiento correspondió a la operadora de insolvencia Rosalba Duarte Rueda del el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición Fundación Liborio Mejía que, en auto No. 1 de 7 de diciembre de 2021, admitió la petición y en consecuencia, ordenó comunicar a todos los acreedores relacionados por la deudora peticionaria y la notificación a las agencias judiciales para prevenirlos sobre la actuación.

**2.** En audiencia celebrada el 9 de febrero de 2022 se puso en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias denunciadas y se actualizaron los montos de capital e intereses, así como la clase de crédito de cada uno de ellos.

Durante dicha audiencia, los acreedores Gladis Esther Valderrama Báez y Álvaro Calvo Niño formularon objeciones.

**3.** Dentro de la oportunidad la acreedora Gladis Esther Valderrama Báez, presentó la sustentación de las objeciones, en la que argumentó que la solicitud de negociación de deudas no cumplía con los requisitos contemplados en el artículo 539 del C.G.P., en la medida que se incorporó información que no es cierta, además no se acreditó lo dispuesto en el artículo 538 del estatuto procesal por no superar el pasivo del 50%.

Indicó que, no se aportaron pruebas a fin de demostrar la veracidad de la información suministrada en la solicitud de negociación de deudas, concretamente, en punto de la acreencia por alimentos relacionada en favor de sus hijas MONICA PAOLA HIGUERA MOLINA, CLAUDIA ISABEL HIGUERA MOLINA y ANGELICA MARIA HIGUERA MOLINA en la suma de \$113.930.308 que presuntamente es objeto de cobro dentro del proceso No.15238318400220210016400 ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama y pese a que manifestó que en dicha causa se había librado mandamiento de pago, lo cierto es que, la demanda fue rechazada por auto del 13 de septiembre de 2021 luego de no haber sido subsanada en tiempo, lo que demuestra que la señora Doris del Rosario Molina Mora pretende afectar las acreencias incurriendo en supuestos comportamientos constitutivos de presunto fraude procesal, falsedad en documento privado por su uso, falso testimonio, entre otros.

Aunado a lo anterior, los documentos que fueron puestos de presente, supuestamente que sustentaban el Proceso Ejecutivo con radicado No. 15238318400220210016400, del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, fueron otros totalmente diferentes, que nunca se informaron en la solicitud de negociación de deudas y mucho menos en la audiencia celebrada en enero 2022, y corresponden a un Contrato de Dación de pago de fecha 06 de abril de 2018 celebrado entre la deudora y sus hijas que fue radicado dentro del Proceso de Alimentos No. 2008 -00296, que cursó en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, en donde por decisión de abril 27 de 2018, este Juzgado Aprobó el acuerdo por transacción extraprocesal, y en consecuencia dio por terminado el proceso. De manera que la mentada acreencia es inexistente tratándose de una actuación de mala fe al brindar información que falta a la verdad.

De otro lado, adujo que el domicilio de la solicitante no es Bogotá, circunstancia que no fue tomada en cuenta por parte del Centro de Conciliación.

En igual sentido, omitió informar que figura como demandante en el proceso ejecutivo No. 152381030032002006800 instaurado contra NAIRO ARMANDO FONSECA LÓPEZ, que cursa en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama (Boyacá), con sentencia de fecha 13 de septiembre de 2018 y liquidación de crédito a su favor, aprobada en la suma de \$42.544.378 en el cual se tiene embargado un bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 074-51873 de la oficina de Registro de instrumentos Públicos de la ciudad de Duitama, lo que permite concluir que oculta activos afectando a sus acreedores.

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que las obligaciones alimentarias a cargo de la deudora son inexistentes relacionándose un pasivo total de \$177.489.218 de los cuales la mentada deuda representa un 64,19% restando el valor de \$113.930.308, el pasivo real asciende a \$63.558.910 equivalente 33.585% con lo que se concluye, que no se cumple con lo expuesto en el artículo 538 del C. G. del P., por no superar el pasivo del cincuenta por ciento (50%) a cargo de la deudora

**3.1.** De las objeciones se corrió traslado al deudor y los demás acreedores, dentro de la oportunidad legal pertinente el acreedor Álvaro Calvo Niño se pronunció coadyuvando la petición de la objetante por cuanto los hechos en que se sustentan se encuentran plenamente acreditados.

Manifestó que en la audiencia celebrada el 9 de febrero de 2022 solicitó realizar un control de legalidad y proposición de nulidad por vulneración del debido proceso que fue ignorada por la apoderada de insolvencia designada sin sustentación alguna, se negó a correr traslado a los demás intervinientes y adelantar las diligencias mínimas para determinar su propia competencia, así como, la prevalencia de la realidad Verdad Verdadera- sobre la mera formalidad, siendo evidente que el vicio por falta de competencia nace desde el mismo domicilio de la solicitante pues éste corresponde a Duitama y no a Bogotá como se indicó en la solicitud de negociación de deudas en Carrera 36 Número 5 -67, Lote No.18, Manzana, dirección que ha sido reportada bajo la gravedad en otras actuaciones judiciales, no obstante, en una clara maniobra dilatoria presenta solicitud de trámite de insolvencia, reconociendo deudas, creadas en beneficio de sus propias hijas y otras inexistentes con la finalidad de defraudar tanto la administración de justicia como los acreedores para burlar sus obligaciones.

Frente al proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2008-00296 que cursó en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, donde se presentó para aprobación de dicho Juzgado, un acuerdo extraprocesal "dación En Pago" que fue aprobado por auto de 27 de abril de 2018, no reúne los requisitos mínimos de exigibilidad, sin que se dictara sentencia alguna, es decir, no existe pronunciamiento judicial que concrete una obligación clara, expresa y exigible.

De manera que, el reconocimiento de la deuda en favor de MONICA PAOLA HIGUERA MOLINA, CLAUDIA ISABEL HIGUERA MOLINA y ANGELICA MARIA HIGUERA MOLIN defrauda a todas luces a los demás acreedores, amén que se incluyó en la suma de \$113.930.308 el valor correspondiente al capital y a los intereses contrariando lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 539 del estatuto procesal

**4.** Por su parte, la deudora Doris del Rosario Molina Mora, se opuso a la prosperidad de las objeciones planteadas argumentando que a solicitud de negociación de deudas cumple con los requisitos mencionados en la Ley 1564 de 2012, situación que fue verificada por parte del operador de insolvencia, además aportó la documentación correspondiente si el centro de conciliación omitió el traslado a los acreedores, éstos se encontraban facultados para solicitarla, el único bien que posee es el señalado en el escrito inicial y si bien el señor Nairo Armando Fonseca López es su deudor no se ha obtenido ningún depósito, no hay sentencia de adjudicación o remate del bien sólo hay una medida cautelar, situación que debía ser objeto de discusión a través de una solicitud de control de legalidad y no como una objeción.

Sobre las obligaciones alimentarias a su cargo afirmó que la demanda con radicado 2021-00164 por el Juzgado 2 Promiscuo de Familia fue rechazada por no haberse subsanado en el término legal otorgado, no por la inexistencia de la obligación y en todo caso no se trata de una deuda reciente sino corresponde a un proceso de alimentos que se inició en su contra desde el año 2008 y aun cuando se solicitó en la audiencia que se aportara el mandamiento de pago se allegó documentación que da cuenta de la existencia de la obligación por el cual se adelantó un proceso judicial que culminó por dación en pago con el bien inmueble incluido en la solicitud, sin embargo, dicho acuerdo fue rechazado por el Juzgado 3° Civil del Circuito en el que cursa proceso hipotecario, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, de tal suerte que la prestación continua vigente, sin que se haya faltado a la verdad.

En cuanto al porcentaje de pasivos tal como se señaló en la solicitud el capital en mora es del 97.775% del total de sus acreencias y aun excluyendo la acreencia que ostenta por concepto de alimentos sólo aumentaría el porcentaje de sus otros acreedores.

### **III. CONSIDERACIONES**

**1.** Dentro del amplio abanico de posibilidades con que el deudor cuenta para honrar sus obligaciones frente a sus acreedores producto de una crisis por el sobreendeudamiento u otros factores, el Legislador creó un nuevo régimen de

insolvencia para personas naturales no comerciantes, que tiene como punto de partida el procedimiento de negociación de deudas, luego, la convalidación del acuerdo privado y la liquidación patrimonial.

Dichos procedimientos, se encuentran regulados en los artículos 531 y siguientes del Código General del Proceso, en donde se establecen los requisitos generales y específicos para poder adelantar el trámite inicial y poder dar paso a cada una de las siguientes etapas.

**1.1.** Dentro de los requisitos generales dispuestos en la Ley, en relación a todas las fases de insolvencia, se encuentra los de procedibilidad, que hacen relación a los presupuestos necesarios para acudir al proceso de insolvencia de persona natural no comerciante y que corresponde a:

**(i) -. No tener la calidad de comerciante**, ello en razón a que si se tiene la misma, otro es el procedimiento que debe adelantarse y otro será el juez competente para conocer de la insolvencia.

De manera, que no revisar tal requisito conlleva no sólo a tramitar un asunto por un rito diferente, sino que se desconoce el funcionario a quien le corresponde tramitarlo (Ley 1116 de 2006), con vulneración al debido proceso, pero lo que es más grave, es que tal falta puede conllevar no sólo a la nulidad del trámite inicial, sino a la no apertura de las siguientes fases de insolvencia.

**(ii). Que la persona no sea controlante de sociedades comerciales o que formen parte de un grupo de empresas.** Esto es, que a pesar de que la persona no sea comerciante, también debe cumplir con el requisito de no ser controlante, ni hacer parte de un grupo de empresas, pues si ello fuera así correspondería adelantar dicho trámite de conformidad con lo dispuesto en las normas de insolvencia empresarial, Ley 1116 de 2006.

**(iii) Que exista una cesación de pagos:** la norma indica que se entenderá que la persona se encuentra en dicho estado, cuando como deudor o garante incumpla el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de noventa días, o que contra ésta cursen dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva, pero en cualquier caso el valor porcentual de las obligaciones deberán representar por lo menos el 50% del pasivo total a su cargo.<sup>1</sup>

Estos requisitos generales son concurrentes, es decir, que deben estar presentes todos y cada uno para poder acudir a la insolvencia de persona natural no comerciante, pues ante la falta de cualquiera de ellos es imposible dar trámite al proceso regulado en el Código General del Proceso y por ende, corresponde al

---

<sup>1</sup> Artículo 538 del Código General del Proceso.

Conciliador o Notario, cuando se da la fase inicial, así como el juez en caso de liquidación, verificar la existencia de éstos y resolver sobre tal punto.

**1.2.** Frente a los presupuestos específicos, responden a cada fase del trámite de insolvencia, para la de negociación de deudas se encuentran establecidos en el artículo 539 *ejusdem*, en relación a la convalidación de acuerdo privado están dispuestos en el artículo 562 y para la liquidación patrimonial en el artículo 563 del estatuto procesal civil.

En ese orden de ideas, la normatividad que regula esta clase de trámites es estricta al señalar que las relaciones o listados de acreedores, activos, procesos judiciales, certificaciones, en fin, toda clase de información que es de su esencia, deben ser fieles a la realidad, completos, detallados y sobre todo actualizados “*con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud*” (parágrafo 2º art. 539 CGP).

Así, pues, cuando la solicitud incumple tales exigencias, es imperativo para el funcionario concursal, inadmitirla señalando sus defectos para que sean enmendados por el interesado, de no ser acatado, se procederá a su rechazo. En caso contrario y una vez sufragadas las expensas, le imprimirá el trámite de rigor como lo señala la normatividad –artículos 542 y siguientes- que supone una serie de efectos a partir de la aceptación –artículo 545-.

**2.** Ahora bien, en relación a la competencia para el conocimiento de los trámites de insolvencia, el artículo 533 establece que: “*conocerán de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del derecho, para adelantar este tipo de procedimientos, a través de los conciliadores inscritos en sus listas. Las notarías del lugar de domicilio del deudor, lo harán a través de sus notarios y conciliadores inscritos en las listas conformadas para el efecto de acuerdo con el reglamentos (...)*”.

**3.** Bajo esta perspectiva, cumple precisar que el procedimiento se compone de una fase introductoria que se gesta en la audiencia de negociación de deudas “*que constituirá el nudo principal del procedimiento*” <sup>2</sup>, previa citación en legal forma de todos los acreedores que impone, en rigor, que tales actos de intimación se surtan con total transparencia permitiendo así el conocimiento real y efectivo para que el desenvolvimiento no se lleve a cabo a sus espaldas con violación de sus derechos superiores que ello acarrearía.

---

<sup>2</sup> Pájaro Moreno, Nicolás. REGIMEN DE INSOLVENCIA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE. ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE. <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/16nicolas-pajaro-moreno.pdf>

Esta audiencia constituye un acto de vital importancia *“la médula del procedimiento de negociación de deudas”* que busca sentar al deudor y sus acreedores a discutir la solución de la crisis. Una primera fase comprende el debate sobre los créditos incorporados por el deudor con miras a que ejerzan sus derechos de contradicción. En la segunda parte, se discutirá sobre la propuesta del deudor y se someterá a votación.

Dice la norma que el conciliador pondrá en conocimiento de los acreedores la **“relación detallada”** de las acreencias y les preguntará si están de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuantía. En caso de disenso –objeciones– deberá procurar conciliarlas a través de distintas fórmulas de arreglo que, de declararse fracasada, procederá conforme los artículos 551 y 552 *ibidem*. El operador debe suspender la audiencia por el término de 10 días, para que, dentro de los cinco (5) primeros días, los inconformes presenten las objeciones por escrito junto con las pruebas que pretendan hacer valer. Otro término igual, correrá para los demás acreedores y deudor para que se pronuncien y aporten pruebas.

Normas de las que se desprende, que el conocimiento de los procesos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante corresponde a los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia o la Notarías del lugar del domicilio del deudor.

Razón por la que, la competencia de los jueces civiles municipales dentro de los trámites antes citados, se restringe a resolver las objeciones que se hayan hecho sobre la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones relacionadas por el deudor o discrepancias de las propias o respecto de otras acreencias (artículo 550 CGP).

**4.** Trazado el anterior marco legal, se advierte que en el presente asunto corresponde a esta autoridad judicial resolver de plano sobre las posibles irregularidades presentadas en el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante de Doris del Rosario Molina Mora ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición Fundación Liborio Mejía.

Como fundamento de las objeciones el acreedor Gladys Esther Valderrama Báez, presentó tres argumentos centrales, a saber: **(i)** la deudora no se encuentra inmersa en los supuestos de insolvencia de que trata el artículo 538 del C.G.P en la medida que el valor porcentual de sus obligaciones no representa el 50% o más del pasivo total a su cargo, **(ii)** la solicitud de negociación de deudas presentada por la deudora no comprendía la totalidad de los requisitos legales toda vez que se omitió información en punto de los activos con que cuenta y se realizaron manifestaciones que no corresponden a la realidad en cuanto a la acreencia por concepto de alimentos denunciadas a favor de MÓNICA PAOLA HIGUERA

MOLINA, CLAUDIA ISABEL HIGUERA MOLINA y ANGELICA MARIA HIGUERA MOLINA que hacen presumir la inexistencia de dichas obligaciones y (iii) el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición Fundación Liborio Mejía no era competente para conocer del procedimiento de persona natural no comerciante de la señora Doris del Rosario Molina Mora por cuanto su domicilio corresponde al municipio de Duitama.

**i) En cuanto a los reparos relacionados con los supuestos de insolvencia y la competencia del centro de conciliación.**

Conforme a las anteriores precisiones, descendiendo al caso objeto de estudio, se advierte que los reparos efectuados sobre estos aspectos no corresponden a una objeción de aquellas que deba resolver la jurisdicción civil.

En efecto, se sale de la órbita de competencia de esta funcionaria zanjar la problemática suscitada, pues, en puridad, lo aquí planteado se circunscribe a una controversia que no se sitúa, *per se*, en el terreno de una objeción a un crédito sino a un asunto atañadero a los requisitos generales de procedencia del trámite de negociación de deudas y la competencia del centro de conciliación, cuyo estudio corresponde al conciliador designado, quien debe hacer un análisis concienzudo para su admisibilidad, sin parar mientes en algunas circunstancias que dejan al descubierto duda acerca del domicilio de la deudora.

Así que, se rechazará de plano la objeción planteada por falta de competencia funcional para resolver sobre ella.

**ii) Frente a los requisitos de la negociación de deudas y las acreencias de que son titulares Mónica Paola Higuera Molina, Claudia Isabel Higuera Molina y Angélica Marie Higuera Molina.**

Como se señaló en líneas precedentes que en asuntos de esta naturaleza es menester que el deudor presente una solicitud de trámite de negociación de deudas atendiendo todos y cada uno de los requisitos dispuestos en el artículo 539 del Código General del Proceso, entre estos, debe incluir un listado de los bienes, una relación completa y actualizada de todos los créditos señalando la cuantía de cada uno de ellos y diferenciando capital e intereses, la naturaleza de los mismos, la tasa de interés aplicada y demás circunstancias que resultan de carácter relevante en caso de no contar con toda la información deberá manifestarlo de forma expresa, siendo así, es deber del conciliador designado o en su defecto del notario previo a la admisión comprobar el cumplimiento de tales exigencias.

A su vez el parágrafo primero del precitado canon preceptúa que: *“La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el*



*deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, **se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago***”.

De lo anterior se desprende que las manifestaciones efectuadas por el deudor gozan de plena validez en la medida que se entienden rendidas bajo la gravedad de juramento de ahí que la información suministrada se presuma cierta, pues de otro modo supondría vulnerar el principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política. Al respecto el máximo tribunal en materia constitucional precisó:

*“La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero **dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.**”<sup>3</sup>(énfasis fuera de texto)*

Bajo esta perspectiva sobre el requisito de la relación completa y actualizada de todos los créditos y acreedores, la doctrina ha dicho que se fundamenta en la prerrogativa antes citada así: *“Este requisito es desarrollo de los principios de colectividad e igualdad. En efecto, el deudor debe relacionar todos y cada uno de sus acreedores, **relación que de una parte es expresión del principio de buena fe y comporta por tanto el reconocimiento de la existencia y cuantía de cada una de las obligaciones que se reclaman.**”<sup>4</sup>*

**5.** Precisado lo anterior, descendiendo al caso puesto a consideración del despacho, teniendo en cuenta que la competencia del Juez en el marco del procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante se circunscribe a resolver acerca de los reparos propuestos frente a la relación de acreencias presentada en la audiencia de negociación de deudas, en la que sólo se pueden formular objeciones de cara la existencia, naturaleza y cuantía de las mismas, tampoco es posible en esa etapa del proceso verificar los requisitos legales que debe contener la solicitud presentada por el deudor.

Lo anterior, porque en los términos del artículo 533 del estatuto procesal, dicha tarea está asignada al Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia o la Notaria del lugar del domicilio del deudor, quienes tienen el deber de

---

<sup>3</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

<sup>4</sup> Juan José Rodríguez Espitia (2015), *Régimen de Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante*, Universidad Externado de Colombia.

constatar que se cumplan a cabalidad los presupuestos legales para la admisibilidad del trámite de insolvencia.

**5.1.-** Al margen de lo ya expuesto, si en gracia de discusión se aceptara que es dable pronunciarse respecto de los requisitos de la solicitud, que no lo es, se observa que la parte objetante dejó huérfano el debate probatorio, pues no allegó una prueba fehaciente para acreditar su dicho, esto es, que las manifestaciones efectuadas por la deudora frente a los bienes que posee y la información relativa a sus acreedores no corresponden a la realidad, quedando sus afirmaciones en el mero enunciado.

Es que, conforme las normas, jurisprudencia y doctrina citada en párrafos precedentes, en el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante basta con la sola declaración del deudor para presumir por cierta la información suministrada con relación a los bienes, ingresos y, créditos, incluso las normas que regulan la materia faculta al deudor para que en el evento en que desconozca ciertas circunstancias frente a las obligaciones por él adquiridas lo manifieste, pues de lo contrario conllevaría a la transgresión del principio de buena fe que se presume concurre en todas las actuaciones administrativas y judiciales.

Por consiguiente, de existir algún yerro en el contenido de la solicitud de negociación de deudas, de acuerdo a la carga de la prueba plasmada el artículo 167 del Código General del Proceso según el cual *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*, correspondía al objetante demostrar que la señora Doris del Rosario Molina Mora actuando de mala fe realizó afirmaciones temerarias acerca de su estado financiero, máxime cuando se hizo referencia a conductas de tipo punible y falsedad en documento privado y falso testimonio, pues no es posible exponer argumentos de tal talante sin siquiera aportar prueba alguna.

Ahora bien, aun cuando la deudora informó en la solicitud que se encontraba en curso el proceso judicial No. 15238318400220210016400 ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama instaurado por las Mónica Paola Higuera Molina, Claudia Isabel Higuera Molina y Angélica Marie Higuera Molina por una obligación constituida por concepto de alimentos, demanda que fue rechazada por auto del 13 de septiembre de 2021 según se constata de la prueba documental arrimada, lo cierto es que, esta circunstancia en sí misma no implica que el crédito no exista, máxime si en cuenta se tiene que las referidas acreedoras se hicieron parte en el trámite concursal en aras de hacer valer sus intereses en ese escenario y se aportaron documentos que demuestran que en el año 2008 ya se había tramitado un asunto para el cobro de dichas acreencias.

Así mismo, en lo que tiene que ver con la acreencia en favor Doris del Rosario Molina Mora por cuenta del proceso ejecutivo No. 152381030032002006800 instaurado contra NAIRO ARMANDO FONSECA LÓPEZ, que cursa en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama (Boyacá), pese a que se encuentra demostrado que en efecto se presentó una omisión por parte de la deudora al no denunciar este activo pues en el escrito mediante el cual describió las objeciones manifestó *“El señor NAIRO ARMANDO FONSECA LOPEZ, no es ACREEDOR, es un deudor, ya quiero le debo nada, es el, el que me adeuda”*, como quedó sentado en párrafos precedentes correspondía al operador de insolvencia designado verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 539 del estatuto procesal y de ser el caso realizar los controles de legalidad a que haya lugar, sin que en esta oportunidad a través de la figura de las objeciones pueda esta juzgadora proceder de conformidad ajustando el procedimiento.

**6.** Lo anterior no es óbice para que el operador de insolvencia no vuelva sobre los puntos expuestos en esta objeción y analice con detenimiento la situación en torno a los requisitos de la solicitud de negociación de deudas radicada por Doris del Rosario Molina Mora concretamente, su domicilio y los procesos judiciales que adelante la deudora, a fin de evitar futuras controversias como las que habilita en igual sentido el Código General del Proceso.

Y es que es plausible jurídicamente verificar si es o no procedente adelantar el trámite de negociación de deudas, esto con la finalidad de que no se vean vulnerados los derechos fundamentales, y por qué no decirlo, evitar futuras controversias como las que habilita en igual sentido el Código General del Proceso o que las fases posteriores sean rechazadas por falta de los presupuestos generales para iniciar trámites de insolvencia de persona natural no comerciante.

**7.** En ese orden de ideas habrán de declararse infundadas las objeciones formuladas por Fondo de Empleados de Seguros Bolívar-ADEBOL en el trámite de la referencia.

#### **IV. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR INFUNDADAS** las objeciones formuladas por la acreedora Doris del Rosario Molina Mora.

**SEGUNDO: ADVERTIR** a las partes que contra esta decisión no procede recurso alguno por expresa remisión, parte final del inciso 1° del artículo 552 del Código General del Proceso.

**TERCERO: REMITIR** por secretaría de INMEDIATO al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición Fundación Liborio Mejía las presentes diligencias para lo de su competencia. Déjense las constancias del caso. Oficiese.

**Notifíquese,**<sup>5</sup>

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ  
JUEZ**

Firmado Por:  
Iris Mildred Gutierrez  
Juez Municipal  
Juzgado Municipal  
Civil 019  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **968567be2c9f64f23469eae9b2df53e2a635cf5a98be9978f82735a208339b86**

Documento generado en 11/08/2022 02:09:03 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

---

<sup>5</sup> Este auto se notificó por estado No. 86 de 12 de agosto de 2022.